

La inestabilidad política en 2019 continuó obstaculizando la capacidad del gobierno haitiano para satisfacer las necesidades básicas de su gente, resolver problemas de derechos humanos de larga data y abordar crisis humanitarias.

En julio de 2018, el anuncio del gobierno de que eliminaría los subsidios, permitiendo que los precios del combustible aumentaran hasta en un 50 por ciento, provocó protestas generalizadas y el peor malestar civil que el país ha visto en años. En febrero de 2019, las manifestaciones se intensificaron después de que el gobierno declaró un estado de emergencia económica, con grupos de oposición que exigían la renuncia del presidente Jovenel Moïse en medio de acusaciones de que había administrado mal los fondos del gobierno destinados a [programas sociales](#). En septiembre, las protestas antigubernamentales crecieron en tamaño y la policía respondió en varios casos con fuerza excesiva. Al momento de escribir, Haití estaba entrando en su décima semana de manifestaciones y enfrentamientos políticos.

La corrupción, la vulnerabilidad a los desastres naturales, el resurgir de la violencia de pandillas y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes siguen siendo las principales preocupaciones de derechos humanos en Haití.

## Desplazamiento

Los haitianos siguen siendo susceptibles al desplazamiento por desastres naturales, incluidas tormentas tropicales y huracanes. Más de 140,000 hogares aún necesitan refugio decente más de tres años después de que el huracán Matthew causó, según diversas estimaciones, entre 540 y 1,000 muertes. Casi [9,000 personas más fueron desplazadas](#) en 2018, la mayoría debido a viviendas destruidas por un terremoto en octubre.

Hasta enero de 2019, casi [35,000 personas](#), más de la mitad de ellas mujeres y niños, vivían en campamentos de desplazados formados después de un terremoto de 2010. Las autoridades no han brindado asistencia para reasentarlos o devolverlos a sus lugares de origen.

## Derechos a la salud, el agua y la alimentación.

Las comunidades más vulnerables del país continúan enfrentando riesgos ambientales, como la deforestación generalizada, la [contaminación de la industria](#) y el acceso limitado al agua potable y al saneamiento. Unos [2,6 millones de haitianos](#), aproximadamente una cuarta parte de la población del país, viven con inseguridad alimentaria. Las bajas precipitaciones afectan crónicamente gran parte del país.

Desde su introducción por las fuerzas de paz de la ONU en 2010, el cólera ha infectado a más de [820,000 personas y se ha cobrado casi 10,000 vidas](#) . Sin embargo, los esfuerzos de control intensificados, incluida una ambiciosa campaña de vacunación, han resultado en una disminución significativa de los casos, de más de 41,000 casos sospechosos y 440 muertes en 2016 a poco más de [300 casos sospechosos y tres muertes](#) de enero a abril de 2019.

## Sistema de justicia criminal

El sistema penitenciario de Haití sigue gravemente sobrepoblado, y muchos reclusos viven en condiciones inhumanas. [Más de 115](#) personas murieron en las cárceles haitianas en 2018 y 19 murieron entre el 1 de marzo y el 15 de mayo de 2019. Según el ex [experto independiente de la ONU](#) en Haití, el hacinamiento se debe en gran medida al alto número de arrestos arbitrarios y al gran número de detenidos en prisión preventiva del país. Hasta mayo de 2019, las cárceles haitianas albergaban a poco más de [11,000 detenidos, el 73 por ciento](#) de los cuales estaban en espera de juicio.

## Analfabetismo y barreras a la educación

El analfabetismo es un problema importante en Haití. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aproximadamente [la mitad](#) de todos los haitianos de 15 años o más son analfabetos. La calidad de la educación es generalmente baja, y el 85 por ciento de las escuelas son administradas por entidades privadas que cobran tarifas escolares que pueden ser prohibitivamente caras para familias de bajos ingresos. Cerca de [180,000](#) niños y jóvenes permanecen fuera de la escuela primaria y secundaria en todo el país.

## Abusos por parte de las fuerzas de seguridad

Según una investigación realizada por la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), durante las manifestaciones de octubre de 2018, los agentes de policía fueron responsables de tres ejecuciones sumarias y 47 casos de fuerza excesiva que [hirieron a 44 manifestantes y mataron a otros tres](#) . El informe de MINUJUSTH también señala que, durante las protestas de noviembre de 2018, [21 víctimas, incluidas 6 muertes](#) , supuestamente resultaron del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. En febrero de 2019, cuando la policía intentó eliminar las barricadas y controlar las manifestaciones masivas contra el gobierno, estallaron enfrentamientos y al menos 34 personas murieron y más de 100 resultaron heridos. Veintitrés policías también resultaron heridos.

Entre el 16 de septiembre y el 17 de octubre, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) informó que al menos [ocho periodistas](#) resultaron heridos durante las protestas. Entre los heridos se encontraba un fotoperiodista de Associated Press [disparado en la mandíbula](#) por un senador haitiano que abrió fuego cerca del edificio del Senado, y un camarógrafo de Radio Sans Fin [disparó en la](#)

[muñeca](#) cuando la policía disparó contra una multitud. En octubre, un periodista de radio que cubría las protestas fue encontrado [muerto](#) a [tiros](#) en su [automóvil](#) .

En noviembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una [declaración](#) sobre los disturbios, atribuyendo al menos 19 de las 42 muertes en protestas desde mediados de septiembre a las fuerzas de seguridad del gobierno.

RNDDH informó que al menos 71 personas fueron asesinadas durante una masacre de noviembre de 2018 en el barrio de La Saline. [Los informes](#) de la ONU y la policía haitiana en junio indicaron la [participación](#) de dos ex oficiales de la Policía Nacional de Haití y dos altos funcionarios del gobierno. En septiembre, cuando las protestas se intensificaron, ambos funcionarios del gobierno fueron removidos de sus cargos.

## Responsabilidad por abusos pasados

La responsabilidad por los abusos cometidos en el pasado contra los derechos humanos sigue siendo un desafío en Haití. Hasta noviembre, una investigación reabierto sobre los crímenes cometidos por los colaboradores del ex presidente Jean-Claude Duvalier seguía pendiente. Duvalier murió en 2014, seis meses después de que la Corte de Apelaciones del Puerto del Príncipe dictaminó que el estatuto de limitaciones no podía aplicarse a crímenes contra la humanidad y ordenó que las investigaciones en su contra continuaran por crímenes cometidos durante su presidencia (1971-1986). Las denuncias de violaciones incluyen detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones sumarias y exilio forzado.

## Derechos de las mujeres y las niñas

La violencia de género es un problema generalizado. Haití no cuenta con una legislación específica contra la violencia doméstica, el acoso sexual u otras formas de violencia dirigidas a mujeres y niñas. La violación fue criminalizada explícitamente en 2005, por decreto ministerial.

Ha habido poco progreso hacia la aprobación de una reforma del código penal presentada al parlamento en abril de 2017 que abordaría algunas de estas brechas en la protección. El proyecto de código penal también despenalizaría parcialmente el aborto, que actualmente está prohibido en todas las circunstancias, incluso en casos de violencia sexual.

Entre los sobrevivientes de la masacre de La Saline en noviembre de 2018 se encuentran [11 mujeres y niñas](#) que fueron violadas en grupo y no recibieron apoyo ni asesoramiento médico.

## Orientación sexual e identidad de género

Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) continúan sufriendo altos niveles de discriminación. En 2017, el Senado de Haití aprobó dos proyectos de

ley anti-LGBT, que estaban siendo considerados por la Cámara de Diputados al momento de redactarse.

Un proyecto de ley regularía las condiciones para la emisión del Certificat de Bonne Vie et Mœurs, un certificado de buena reputación exigido por muchos empleadores y universidades como [prueba de que una persona no ha cometido un delito grave](#). El proyecto de ley enumera la homosexualidad, junto con la pornografía infantil, el incesto y la explotación sexual comercial de niños, como una razón para negarle a un ciudadano un certificado.

El otro proyecto de ley exige la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como cualquier apoyo público o defensa de los derechos LGBT. En caso de que la prohibición se convierta en ley, "las partes, los copartícipes y los cómplices" de un matrimonio entre personas del mismo sexo podrían ser castigados con tres años de prisión y una multa de aproximadamente US \$ 8,000.

## **Deportación y apatridia para dominicanos de ascendencia haitiana**

El estado precario de muchos dominicanos de ascendencia haitiana y migrantes haitianos que trabajan en la República Dominicana siguió siendo una gran preocupación en 2019. Al menos 250,000 de esas personas volvieron a Haití entre 2015 y 2018 después de que los funcionarios dominicanos comenzaron las deportaciones de conformidad con un controvertido Plan de 2015 para el Regularización de extranjeros en la República Dominicana. Muchas deportaciones no cumplieron con los estándares internacionales y muchas personas fueron arrastradas en deportaciones sumarias arbitrarias. Muchos otros abandonaron la República Dominicana bajo presión o amenaza.

A mediados de 2018, según los informes, más de 200,000 haitianos en la República Dominicana vivían sin documentación válida, en riesgo de deportación. Solo durante los primeros seis meses de 2019, un promedio de [más de 10,000 haitianos](#) fueron devueltos a su país cada mes.

## **Minería y acceso a la información**

En la última década, los inversores extranjeros han seguido el desarrollo del incipiente sector minero de Haití. En 2017, el gobierno haitiano presentó un proyecto de ley de minería al parlamento. Según la Clínica de Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, el proyecto de ley no menciona los derechos de las personas desplazadas por las actividades mineras y no otorga tiempo suficiente para una revisión ambiental adecuada, lo que restringe la capacidad del gobierno para estudiar la documentación a fondo y limita la oportunidad de Participación pública o comentario.

Además, contiene disposiciones que podrían hacer que todos los documentos de la empresa, incluidos aquellos sobre impactos ambientales y sociales, sean confidenciales durante 10 años, evitando que las comunidades afectadas realicen consultas

significativas sobre proyectos mineros. El proyecto de ley estaba pendiente de consideración por el Parlamento al momento de redactarse.

## Actores internacionales clave

MINUJUSTH, destinado a ayudar a promover el estado de derecho, el desarrollo policial y los derechos humanos, se extendió en abril por un período final de seis meses. En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU hizo la transición a una misión política especial que no es de mantenimiento de la paz, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

En 2016, el secretario general de la ONU se disculpó por el papel de la ONU en el brote de cólera y anunció la intensificación de los esfuerzos para tratar y eliminar el cólera y el establecimiento de un fondo fiduciario para recaudar \$ 400 millones para proporcionar "asistencia material" a los más afectados por la epidemia. . Hasta noviembre de 2019, solo se habían comprometido \$ 27.7 millones para el esfuerzo.

En octubre, las víctimas del brote de cólera solicitaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revisara el caso de *LaVenture et al v. Naciones Unidas* en un esfuerzo por desafiar la inmunidad de la ONU en las demandas por cólera. El tribunal decidió no escuchar el caso.

En respuesta al informe de la masacre de La Saline de la ONU, el Secretario General de la ONU, António Guterres, [comentó](#) en julio que "[I] a denuncias de complicidad de al menos dos policías y un representante del Estado exigen que las autoridades actúen rápidamente para llevar ante la justicia los responsables de los crímenes".

En octubre de 2018, un juez federal de EE. UU. Emitió una orden judicial preliminar que bloqueaba temporalmente una decisión de la administración Trump de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos a partir de julio de 2019. La terminación afectaría a aproximadamente 60,000 haitianos a quienes se les permitió permanecer en los EE. UU. el terremoto de 2010, incluidos los padres de más de 27,000 niños nacidos de haitianos en los Estados Unidos bajo el programa. En febrero de 2019, la administración Trump [anunció](#) que ampliaría el TPS para Haití hasta enero de 2020.

En abril, un segundo juez federal de los EE. UU. [Emitió un mandato por separado que](#) bloqueaba el plan de la administración para poner fin al TPS. En un esfuerzo por cumplir con estos mandatos, en noviembre el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Anunció que [ampliaría el TPS](#) para los haitianos hasta el 4 de enero de 2021.

En 2019, Haití respaldó la Declaración de Escuelas Seguras, un compromiso internacional para proteger la educación durante los conflictos armados .

